

El árbol y el bosque en el Uruguay de la recesión.

Sociedad, estado, política y corporaciones: necesidades y posibilidades

Gerardo Caetano

La coyuntura recesiva que afecta al Uruguay desde hace cuatro años ha golpeado duramente el tejido social del país. Han crecido las vulnerabilidades sociales y económicas, y la inestabilidad de sus socios más cercanos, junto a muchos otros fenómenos que todos recordamos, ha impactado negativamente sobre nuestra sociedad. No basta el crecimiento económico para generar una mejora del escenario social. Hay múltiples ejemplos y muy cercanos de países cuyas economías crecieron sin que mejoraran sus niveles de igualdad social. Sin embargo, a poco de que se profundiza en el análisis de esta coyuntura de recesión, este nos ayuda a visualizar algunos problemas más estructurales en la sociedad uruguaya. En ese sentido, cabe advertir que no es hacia fines de 1998 cuando comienza a insinuarse la caída de la actividad económica, sino desde bastante tiempo atrás, que Uruguay presenta problemas estructurales ya instalados, con una hondura mayor de lo que se cree y una potencialidad de conflictividad elevada.

EL ESCENARIO SOCIAL DEL URUGUAY
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Uruguy se está alejando desde hace ya bastante tiempo de la vieja ma-

triz de igualdad de oportunidades que lo había caracterizado como una “sociedad hiperintegrada”. Existe un evidente y constatable avance de la segmentación, fragmentación y desacoplamiento de las

poblaciones que pertenecen a los quintiles medios y más ricos con respecto a aquellas del quintil más pobre, con el agravante de que más de la mitad de todos los niños uruguayos entre cero y cinco años de edad está en este último quintil y apenas un 4% en el primero o más rico¹.

Junto a esta marcada infantilización de la pobreza, que resulta escandalosa y que hipoteca el futuro, se han verificado avances preocupantes de la segmentación en los ámbitos de la educación, la salud y hasta en los espacios de radicación territorial de los distintos estratos sociales. Como han revelado estudios recientes, desarrollados por investigadores probadamente rigurosos, aproximadamente la mitad de los niños entre 0 y 5 años y el 40% entre 6 y 13 años viven por debajo del umbral de pobreza, aún reconociendo y recalcando que la línea de pobreza en Uruguay es exigente y define a una población pobre que está en su mayoría bien lejos de la indigencia o la miseria. Ahora bien, los trabajos del IPES, de la UCUDAL revelan que a esta infantilización aguda de la pobreza se le suman fenómenos también graves, como la consolidación de bolsones de pobreza dura y marginal, sobre los que las políticas sociales pueden hacer menos y desde donde existe una

menor capacidad de respuesta a coyunturas favorables. De ese modo, la igualdad de oportunidades se quiebra desde la base. La evolución de muchos de estos fenómenos no depende sólo de lo que hagan o no los gobiernos de turno. Ante problemas estructurales de esta envergadura, el éxito o el fracaso en contrarrestar estas tendencias es un problema que debe ser asumido por la sociedad en su conjunto. Y debemos advertir que de lo que estamos hablando es del futuro, de que estas tendencias no se transformen en destino.

El nivel socioeconómico de la escuela y el barrio se están homogeneizando.

A estos problemas se suman otros que se combinan y agravan la situación social de los sectores más desfavorecidos. La precarización del mercado laboral, la inestabilidad creciente de los marcos familiares y el distanciamiento cada vez mayor entre las personas pertenecientes a estratos sociales diferentes afecta antes que nada a los más pobres. Es cada vez más visible que en los barrios montevideanos no interactúan personas de distintos estratos sociales. Esa interacción tampoco se produce en aquellos ámbitos tradicio-

¹ Éstas y otras evidencias y apreciaciones sobre el escenario social, la pobreza y la desigualdad se basan sobre todo en las investigaciones desarrolladas por Rubén Kaztman y Fernando Filgueira desde el programa de investigación sobre integración, pobreza y exclusión social de la Universidad Católica del Uruguay. Ver en particular Kaztman y Filgueira F., *Panorama Social de la Infancia y la Familia en Uruguay*, Instituto Interamericano del Niño/Universidad Católica, 2001. También se presentan datos y se recogen ideas presentadas en el primer Informe de Desarrollo Humano del Uruguay, desarrollado por los mismos autores. Como trabajos pioneros en esta materia se encuentran los ya clásicos de Juan Pablo Terra y en tiempos más recientes la producción de Carlos Filgueira, especialmente sus textos sobre jóvenes y educación, vulnerabilidad y el artículo “Sobre Revoluciones Ocultas, La Familia en el Uruguay”, CEPAL, Montevideo, 1999.

nales de integración social como era la escuela, que se está homogeneizando en cuanto a su nivel socioeconómico al igual que el barrio. (*Ver gráfico al final del artículo*).

La agenda social no se resuelve sólo con crecimiento y exige políticas sociales proactivas y específicas.

Los jóvenes y adolescentes también son afectados prioritariamente por estos fenómenos sociales. Un reciente estudio del MESYFOD revelaba que entre los 12 y los 27 años un 50% de los jóvenes ya abandona el sistema educativo mientras que más del 10% de ese mismo segmento etario no sólo no estudia sino que tampoco trabaja. Estos altísimos niveles de deserción escolar (de los más altos de América Latina) y los problemas de inserción laboral se vuelven más graves frente a las transformaciones contemporáneas de la economía global: como se sabe, ésta tiende cada vez más a generar disparidades de empleo e ingresos crecientes entre los trabajadores más y menos calificados.

Podríamos agregar fenómenos como la significación del embarazo precoz en los hogares más pobres, el agravamiento severo del desempleo liso y llano entre los más jóvenes o la situación de los trabajadores desalentados que ya no buscan más empleo, pero todo eso consolidaría la perspectiva señalada anteriormente: más allá de la recesión y de sus efectos muy negativos respecto a una sociedad que había mejorado claramente sus tendencias y escenarios luego de la dictadu-

ra, la agenda social que tenemos frente a nosotros no se resuelve sólo con crecimiento, exige políticas sociales proactivas y específicas. El fin de la recesión es prioritario pero no suficiente frente a tamaños problemas.

Resulta indispensable señalar y destacar que Uruguay logró efectivamente mejorar sus niveles de pobreza y mantener (y según algunos estudios disminuir) los niveles de desigualdad entre 1985 y 1994 (PNUD/IDH, 1999). Después de la *debacle* social con que termina la dictadura, del ajuste recesivo de 1983-84 y de una pauperización muy grave de la población, hubo una mejora fuerte de la economía al retornar los gobiernos democráticos que supieron combinar crecimiento económico con abatimiento de la pobreza. (*Ver gráfico al final del artículo*).

Este indudable éxito volvió a hacer del Uruguay el país más igualitario de América Latina (claro que ésta era de las regiones que presentaba mayor inequidad social en el planeta). Sin embargo, estas tendencias favorables comienzan a detenerse hacia mediados de los años noventa, como lo indican por ejemplo los muy buenos estudios de Kaztman y Filgueira, entre otros. Las razones son varias: se llega a un núcleo duro de la población pobre con zonas de marginalidad muy fuerte sobre el cual es muy difícil operar con eficacia aun desde políticas sociales orientadas o focalizadas; el propio desarrollo económico destruye o precariza empleos no calificados, lo que afecta a los sectores menos educados que tienden a ser los más pobres, y se produce un incremento en el diferencial de ingresos entre los sec-

tores más educados y menos educados. Todo ello contribuye a frenar el descenso de la pobreza y eventualmente a su moderada expansión. (*Ver gráfico al final del artículo*).

La sociedad toda, no sólo un gobierno o el Estado, comienzan a encontrarse con problemas sociales más difíciles de resolver, con una pobreza más difícil de abatir. Aunque siguen mejorando indicadores fundamentales como la mortalidad infantil, la cobertura educativa de los preescolares (instrumento fundamental para generar igualdad en una sociedad como la uruguaya), muchos de esos fenómenos más estructurales que veníamos mencionando se consolidan y en algunos casos (como el de la infantilización de la pobreza) se profundizan. Luego vino la recesión económica iniciada en el '99 y gradualmente y por distintas vías se afectó el conjunto del escenario social. Podría ingresarse en el debate instalado en el país desde hace ya años respecto a las formas de medición de la pobreza y sus resultados diversos. Se trata de una discusión relevante que hay que dar con rigor y sin intereses políticos menores. Pero cabe ir más allá: el recorrido histórico de la evolución de los indicadores sociales en el Uruguay desde el fin de la dictadura hasta acá nos revela que hay problemas estructurales que trascienden las coyunturas y la acción de los gobiernos, que se profundizan pero que no nacen con la recesión económica, y cuya gravedad exige sin demora políticas de Estado y, sobre todo, políticas de sociedad. Y con ese sentido de urgencia que al país le cuesta tanto.

La evolución de los indicadores sociales revela que hay problemas que trascienden las coyunturas y la acción de los gobiernos.

LA INVISIBILIDAD DE LA URGENCIA SOCIAL

En otras oportunidades hemos señalado que Uruguay convive mal con el cambio pues tiende a disimular sus transformaciones, porque le cuesta asumir los conflictos que anidan en ellas. Muchas de las señales que hemos anotado, pese a que han sido advertidas por numerosos y calificados investigadores, terminan siendo “invisibilizadas” por la sociedad. Esto ocurre, entre otras cosas, porque quienes emiten estas señales, que son los más pobres y los más jóvenes, no constituyen los sectores con voz más amplificada ni los más activos en efectuar reclamos públicamente. Además, hay un viejo imaginario social uruguayo que vincula la pobreza con el tema de la tercera edad, pero que se olvida de la principal deuda que tenemos como sociedad que, vuelvo a repetir, es con el futuro, es con los niños y los adolescentes.

Las señales de alerta se refuerzan cuando vemos que las acciones estatales se debilitan en su eficacia ante estos fenómenos que se han vuelto estructurales. Todo esto nos puede plantear el horizonte de una sociedad que en pocos años no podamos reconocer. Como cada sociedad define moralmente sus límites de toleran-

cia frente a los fenómenos de desigualdad social, muchas veces sobrecoge el que esos límites parezcan haberse vuelto extremadamente laxos en Uruguay. El país no parece advertir este “huevo de la serpiente” que se está anidando en su seno. Incluso parece haber perdido el sentido de la urgencia y la indispensable rebeldía ante una realidad social que en pocos años puede detonar.

La coyuntura de recesión que tiende a agravar todos estos fenómenos se instala dentro de un marco estructural con vulnerabilidades económicas y sociales muy visibles. El viejo tejido social uruguayo presenta heridas inoculables, con lo cual se están generando bombas de tiempo muy graves. Pero reitero que politizar estos asuntos resultaría mezquino y contraproducente: ningún gobierno por sí, sea del signo que sea, solucionará en solitario estos temas. Sí es responsabilidad intransferible de todo gobierno instalar estos temas en el centro de la agenda pública, darles la prioridad que les corresponde, convocar a todos los actores y promover una sensibilidad social especial para precisar el foco de la acción pública (no sólo estatal) contra la pobreza.

Es necesario aclarar que ninguna sociedad por mejor tradición de paz y de democracia que tenga está vacunada contra un estallido social. Esta aclaración es muy importante para Uruguay que siempre ha tenido una vocación “isleña”, sintiéndose ajeno a los dramas que históricamente han afectado a los países de la región. Si bien éramos diferentes de las sociedades brasileña y

argentina, no estuvimos vacunados contra un golpe de Estado. Por ejemplo, realmente duele mucho la lectura provinciana y bastante mezquina de muchos uruguayos respecto al drama argentino.

Ninguna sociedad, cualquiera sea su tradición de paz y democracia, está vacunada contra un estallido social.

En segundo lugar, la política es sobre todo anticipación. Lo que fracasó en Argentina, entre otras cosas, fue la política porque no anticipó el verdadero riesgo. Se miraba sólo el aumento de los puntos básicos del riesgo país y se era indiferente y omiso frente al crecimiento explosivo de la marginación y la pobreza. Se miraban sólo las señales del sistema financiero internacional (que por cierto hay que mirar y atender) pero se olvidaban que había verdadero riesgo país dentro de fronteras. Hemos visto datos sociales muy preocupantes cuyas proyecciones de pobreza y pauperización nos estremecen. Entonces, desde la mejor tradición de la política uruguaya, debemos anticiparnos, sobre todo cuando tenemos bombas de tiempo instaladas estructuralmente en nuestra sociedad, que no dependen sólo de la acción de un gobierno y que necesitan muchos años de acción conjunta para ser revertidas.

Tercero, éste es un momento muy delicado, hay que ser cautos con las palabras, hay que evitar los alarmismos pero también los silencios que cada vez más suenan a indiferencia o a la vieja “políti-

ca del avestruz”. La expresión “estallido social” tiene connotaciones muy graves y puede anidar muchas significaciones hasta contradictorias. No todas las sociedades “estallan” de la misma manera. A veces en nuestro país parecería que algunos desearan un cataclismo social o una hiperinflación como preámbulo necesario para cambiar a la sociedad de acuerdo a sus ideas. Esos extremistas, que se encuentran tanto en la derecha como en la izquierda, que desde proyectos antagónicos coinciden sin embargo en ese lema absurdo de que “cuanto peor mejor”, son a mi juicio profundamente irresponsables. Como ciudadano no quiero nada parecido a un estallido social o a un episodio de hiperinflación para nuestro país. Porque las sociedades que viven estos fenómenos destructivos, donde la violencia disuelve el tejido social y la convivencia se carga de riesgo y de desconfianza, nunca más vuelven a ser iguales, cuesta mucho reconstruir en ellas –como vemos en el caso argentino– pautas generales auténticamente democráticas y solidarias.

**Las sociedades en que la
violencia disuelve el tejido
social y la convivencia se cargan
de riesgo y desconfianza.**

Por ello, para prevenir cualquier fenómeno de ese tipo, tenga la forma que tenga, la mejor opción –repito– es la anticipación. Las tendencias no tienen que ser entendidas como destino. Sí lo son cuando los gobiernos y la ciudadanía se vuelven miopes e inoperantes para contrarrestarlas.

En Uruguay todavía no tenemos nada similar al Movimiento de los Sin Tierra de Brasil ni a los “piqueteros” argentinos. Nuestros sindicatos son totalmente diferentes a los de Argentina. Nuestra sociedad reacciona de una manera distinta. Los partidos y el Estado todavía mantienen, pese a la crítica creciente de la ciudadanía, elementos de arraigo y continentación que canalizan las demandas. Es también importante decir que nuestra sociedad tiene distintas alternativas políticas y que todavía protesta por la vía electoral. La sociedad uruguaya no tiene tanta energía ni tanta violencia como la argentina. Pero ninguna sociedad está vacunada de una vez y para siempre contra estos procesos, sobre todo cuando el origen de ellos tiene que ver con fenómenos planetarios que también nos impactan, mal que le pese a nuestra inveterada vocación isleña. Lejos de las pontificaciones y de las advertencias de dedo levantado que solo irritan, los uruguayos necesitamos sacudir nuestras distintas “modorras”, somos demasiado autocomplacientes cuando nos miramos al espejo. Seguimos siendo la sociedad más igualitaria en América Latina, pero me pregunto cuánto tiempo más lo seremos si no logramos desarrollar medidas eficaces y urgentes para contrarrestar estos fenómenos de desintegración que hieren nuestro tejido social.

**ESTADO, GASTO PÚBLICO Y EQUIDAD
SOCIAL: LIMITES Y POSIBILIDADES**

No es hora para dogmatismos ni para demagogias. Sí para posturas pragmáticas,

que sean rigurosas pero que a la vez no le tengan temor a las políticas activas y anticíclicas. En un momento de abatimiento del déficit fiscal por supuesto que hay más restricciones, razón de más para plantear radicalmente la discusión de la relación del Estado con la sociedad y hacer transparentes los problemas. Ha llegado la hora de discutir en serio el costo país, las tarifas y los salarios públicos, los privilegios estatales, las asignaciones del gasto público, pero también el tema de la reactivación de la producción y del empleo y el de la inversión. Con recursos acotados, los tópicos de las prioridades en el gasto y en la inversión se vuelven más significativos, sobre todo en un país con los paupérrimos niveles de inversión privada que ostenta hoy el Uruguay. No se trata por supuesto de la vuelta de un Estado expansivo e irresponsable, aunque es precisamente ante los ciclos adversos que un Estado responsable y moderado debe invertir. Sin embargo, terminó la política estadocéntrica, hay que esperar menos del Estado, lo que por cierto no significa no esperar nada. Las políticas públicas deben estimular la confianza necesaria para que los agentes privados se animen a invertir, a crear y mantener empleo, sobre todo en un contexto tan adverso. No todo puede ser ajuste pues como señal eso estimula el repliegue inversor tanto como la irresponsabilidad en el gasto. Pero también en momentos de abatimiento del gasto estatal se vuelve más imperativo el Estado garante y regulador. Muchos asociaron los enfoques desreguladores como equivalentes a vacíos procedimentales y organizativos. Hoy sabemos los costos de

un Estado ineficiente en el control: cuando se le pedía a la sociedad toda que se ajustara una vez más el cinturón, ese mismo Estado con restricciones para gastar debió poner 33 millones de dólares para preservar la estabilidad del sistema financiero uruguayo ante la estafa de unos delincuentes de cuello blanco en un banco de plaza. Y anotemos que, como también lo revela el drama argentino, la inestabilidad del sistema financiero es de las peores cosas que le podrían pasar al país en estos momentos y que es de responsabilidad asumirlo si no se tienen otras alternativas. Por eso mismo, el nuevo Estado que hay que construir requiere también de fuertes inversiones de reingeniería institucional y política para que estas cosas no pasen. Por otra parte, en estos contextos restrictivos es cuando se debe utilizar el bisturí en donde el Estado despilfarra. Si existen irracionalidades en el gasto público, como ha informado la Presidencia, en áreas tan sensibles como los salarios de la administración o la salud pública, es éste el momento para obtener –sin oportunismos– una legitimidad ampliada para operar sobre ellas.

Hay que esperar menos del Estado, lo que no significa no esperar nada.

Esta coyuntura crítica podría ser paradójicamente un momento propicio para negociar un nuevo contrato social entre el Estado y el ciudadano. En Uruguay hay una vieja matriz de Estado que no se puede restaurar y que tampoco puede dar respuestas

eficaces a los problemas contemporáneos. Esto implica un proceso continuo de reforma del Estado que debe ser negociado y no impuesto pero que tampoco puede esperar más. Hoy sabemos que la reforma del Estado –y el suicidio del Estado argentino lo confirma– no es sinónimo de privatización. Incluso algunos ultraprivatizadores de hace algunos años hoy comienzan a cambiar porque también lo está haciendo el mundo. Así como cayó el comunismo también ha caído la “teocracia del mercado” y del “Estado mínimo”, al estilo del “thatcherismo” o del “reaganismo”. Actualmente podemos asumir parámetros más pragmáticos para discutir en serio estos temas, desde los cuales es posible encontrar la idea de una renovación de pacto social inscripto en un Estado menos inflado, que se repliega en algunas cosas para desplegarse con más vigor en otras (por ejemplo en las políticas contra la pobreza estructural o en la promoción de políticas activas de empleo), que gaste e invierta mejor sin asfixiar con sus costos e impuestos al ciudadano, que regule mejor donde tiene que hacerlo y que sea más eficiente y eficaz. Dicho así estos señalamientos parecen una simple reseña de buenas intenciones pero si miramos las discusiones del mundo veremos que todas esas postulaciones pueden concretarse en ejemplos bien pragmáticos y específicos. Si no nos ponemos a tono con esos niveles de discusión, seguiremos con esta sordera provinciana.

La reforma del estado no es sinónimo de privatización.

Hace ya unos años, cuando se discutió la reforma constitucional, el entonces diputado y hoy senador Alejandro Atchugarry planteó la necesidad de incorporar en la Constitución un *New Deal* entre el Estado y el ciudadano. Aunque no me parece que sea materia constitucional, sí creo que la apelación es buena y oportuna. No tiene que ser del estilo de lo que pudo ser la Conapro del Uruguay de los años ochenta o del pacto de la Moncloa en la España de la transición. Más bien, pienso en acuerdos más puntuales y específicos, que sin embargo tengan la persuasividad de consolidar iniciativas bien concretas y con apoyos amplios, y que sean señales positivas de construcción política reformista. Por eso tantos uruguayos vivimos con expectativa primero y con frustración después el debate y la tramitación parlamentaria del proyecto para la transformación de ANCAP² hacia finales del año pasado. El proyecto finalmente acordado, además de configurar en sí mismo una buena solución, era una señal estupenda en momentos especialmente difíciles: fue redactado por muy calificados parlamentarios de todos los partidos políticos con espíritu moderno y negociador, sorteaba por primera vez – más allá del ejemplo muy importante

² ANCAP es la empresa de combustibles uruguaya, fundada en 1931. Actualmente, la ley a que se hace referencia y que fue aprobada en diciembre del 2001, es objeto de un recurso de referéndum.

de la “Comisión para la Paz”³– la línea divisoria entre coalición gobernante y oposición de izquierda (con ganancias evidentes para unos y otros). Puedo entender la actitud del sindicato de ANCAP, en un contexto de tanto temor, de tantas restricciones y desconfianzas. Me cuesta más entender por qué los senadores frenteamplistas Alberto Couriel, Danilo Astori y Enrique Rubio, encargados de negociar el proyecto finalmente aprobado en cámaras, fueron desautorizados luego de una negociación tan razonable.

El terror del desempleo genera vulnerabilidades y transformaciones muy grandes

MERCADO LABORAL, SINDICATOS, EMPRESARIOS Y *AGGIORNAMENTO*

Cuando existe un movimiento sindical como en Uruguay con una central única que representa poco más del 12% de la PEA, pero en cuyas filas más del 60% son funcionarios públicos, entonces este actor tiene evidentemente problemas de representación en la masa de trabajadores. En realidad, cada vez le cuesta más reclutar a los jóvenes y a los trabajadores del sector privado porque en muchas empresas afiliarse a un sindicato equivale

hoy a firmar el despido. A todo esto se suma una sociedad donde la desocupación ha adquirido niveles inéditos al existir medio millón de personas con problemas de empleo, con lo cual se ha transformado la relación del trabajador con su trabajo. Ya no se puede pensar en un trabajador de una única empresa, con un único oficio, etc. En un marco laboral crecientemente flexibilizado, el terror del desempleo ha generado que el trabajador tenga cada vez menor protección. Eso genera vulnerabilidades y transformaciones muy grandes.

En estas circunstancias, el movimiento sindical tendría que modificar su operativa, pero es visible que le cuesta enormemente cambiar. Tiene un muy importante debate de renovación instalado en su interior, pero en su seno los sectores renovadores lamentablemente todavía no han ganado. Cuando uno cruza la acción de los sindicatos más duros y ortodoxos con el mayor o menor éxito de las reivindicaciones propias de los trabajadores, se encuentra que les ha ido peor a quienes tienen ese tipo de dirigencia gremial. Hoy, el movimiento sindical debe pensar mucho en la opinión pública cuando aplica sus medidas de lucha e incorporar una visión moderna y verdaderamente progresista, lo que equivale a dejar atrás definitivamente esquemas “dinosaurios” que son, además, atajos para el desastre, porque alimentan al grupo militante, pero

³ Se trata de una Comisión creada en el año 2000 para investigar la situación de los detenidos desaparecidos uruguayos. Surgió de un acuerdo básico en el que participaron la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay, el presidente Batlle y el presidente del Encuentro Progresista, Dr. Tabaré Vázquez.

terminan desprotegiendo a la mayoría de los trabajadores. Y señalo esto también como trabajador, como un ciudadano convencido de que toda democracia requiere sindicatos fuertes, modernos y autónomos.

Ante la actual crisis los sectores empresariales tampoco se han acompasado a las exigencias de la hora. Cuando tenemos un Estado que ya no puede ser el gran inversor o el “capitalista sustituto” como lo fue históricamente en el país, hay que crear condiciones para tener una masa de empresarios que pueda invertir en clave productiva y no meramente especulativa. Para ello tienen que darse previsibilidades y condiciones políticas que aseguren reglas de juego claras en donde el mejor negocio para un empresario sea crear empleo e invertir en la producción antes que recurrir a la importación o al sistema financiero. Sin embargo, ello no sólo requiere políticas públicas sino también una actitud empresarial más consistente y emprendedora.

En la actual crisis, los sectores empresariales no se han acompasado a las exigencias de la hora.

El sector agropecuario atraviesa también transformaciones muy radicales. Si hoy se observa la acción de las gremiales agropecuarias y se las proyecta históricamente, aparecen fenómenos absolutamente inéditos. Las declaraciones y pronunciamientos más recientes de los principales dirigentes de sus gremiales históricas son especialmente significativos en este aspecto. Se trata de un sector profunda-

mente endeudado y muy heterogéneo en sus desempeños y en sus niveles de eficiencia. Hay muchos productores agropecuarios grandes, medianos y pequeños que hicieron sus “deberes” de manera ejemplar pero que, sin embargo, han sido castigados por los contextos internacionales, pero también por políticas públicas que no los apoyaron ni los defendieron suficientemente. Allí sin duda hay una inversión social que cuidar, tan o más relevante que otras opciones que suelen ser priorizadas. No deben caricaturizarse los reclamos radicales del sector agropecuario.

**POLÍTICA, ANTIPOLÍTICA
Y LA CREDIBILIDAD DE LOS SISTEMAS
Y ELENOS POLÍTICOS**

Cuando se habla de contagio no puedo sino pensar en el factor Argentina. Miles de uruguayos siguen día a día el drama argentino a través de la pantalla de la televisión, con las imágenes estremeedoras de los saqueos, de la impotencia ciudadana frente a la estafa del “corralito”, de la violencia institucionalizada. Allí hay un factor preocupante, que se profundiza ante la imagen de un sistema político corrupto y deslegitimado, sin alternativas, sin garantías, que alimenta una “reacción antipolítica” que crece a niveles insospechados. Yo no creo en la “antipolítica”. Me parece que nada bueno sale de allí. Y el ejemplo argentino nos brinda una lección en esa dirección. En Uruguay tenemos antipolítica con grados mucho menores que en Argentina y otros países de

América Latina. La antipolítica es una tentación terrible. Es como la tentación populista. Es como la tentación autoritaria. Es como la tentación del *shock ultra-liberal* o como la tentación del “hombre providencial” (sea el ministro de Economía con superpoderes o el presidente que brinda el atajo al Primer Mundo). Todas esas tentaciones que son negadoras de la política terminan con balances sociales y económicos desastrosos. Creo que ésa es una de las grandes lecciones que los uruguayos y los latinoamericanos debemos aprender de la crisis argentina. Hoy uno ve que Argentina es una sociedad sin Estado. Una sociedad en situación preanárquica, como lo ha dicho el propio presidente Duhalde, en donde se gobierna “al grito” y no se puede persuadir a una ciudadanía que con justicia se siente una y otra vez estafada. Es el resultado de un sistema político que perdió absolutamente su credibilidad por corrupción, por ineficiencia, por hegemonismo y por una práctica constante de destrucción del adversario.

**La antipolítica es una
tentación terrible.**

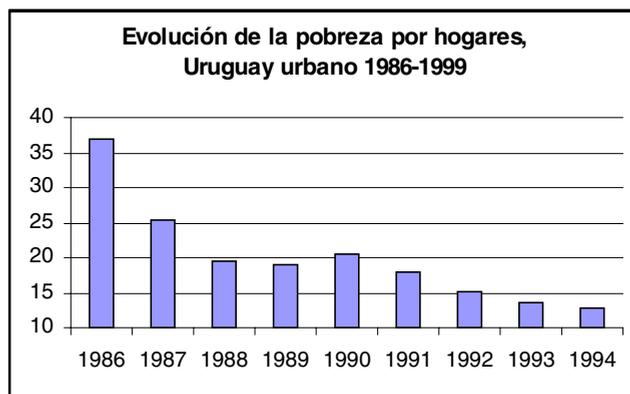
A pesar de todas las carencias que tiene el sistema político uruguayo, allí todavía tenemos un activo a cuidar y potenciar. Los partidos políticos son actores absolutamente indispensables para llevar adelante las políticas sociales y las reformas económicas que el país no puede postergar en función de las exigencias del nuevo contexto regional y mundial. Pero también entre nosotros la antipolítica está impregnando a la sociedad, incluso a los propios políticos que están empezando a hacer “política contra la política”. En esa dirección se pueden obtener réditos pequeños en el corto plazo pero a la larga no se acumulan. También entre los intelectuales está de moda criticar a la política, al Estado, a los políticos, a los partidos. Es mucho más difícil hoy reivindicar el espacio de la política que negarlo, también para el intelectual que tiene que mirar al largo plazo basándose en sus convicciones y en la rigurosidad de su investigación. Y lo digo sabiendo que estos dichos hoy no dan rédito. Da mucho más popularidad hablar contra los políticos, contra los partidos, contra el Estado. Sin embargo, no creo en los oportunismos político-partidarios que no me competen, pero mucho menos en los oportunismos intelectuales que sí me competen.

ANEXOS

Distribución de la población por tramos de edad y composición social del vecindario. Montevideo 1991-1998

Composición social del vecindario	0 a 5	6 a 12	13 a 17	18 a 64	65 y más
1991					
ALTA	44.6	45.7	44.6	53.6	59.4
MEDIA	32.7	32.7	31.7	28.8	25.8
BAJA	22.7	21.6	23.6	17.6	14.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1998					
ALTA	38.7	39.7	40.3	50.5	58.9
MEDIA	29.3	31.4	29.6	28.1	25.8
BAJA	32.0	28.9	30.0	21.4	15.3

Fuente: Tomado de Kaztman y Filgueira, 2001, sobre la base de la ECH, INE.



Fuente: Tomado de Kaztman y Filgueira, 2001, sobre la base de la ECH, INE.



Fuente: Tomado de Kaztman y Filgueira, 2001, sobre la base de la ECH, INE.